



Consejo Económico y Social

Distr.
GENERAL

E/CN.4/1986/NGO/49
10 de marzo de 1986

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

COMISION DE DERECHOS HUMANOS
42º período de sesiones
Tema 5 del programa

CUESTION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CHILE

Comunicación escrita presentada por la Federación Sindical
Mundial, organización no gubernamental reconocida como
entidad consultiva (categoría I)

El Secretario General ha recibido la siguiente comunicación, que se distribuye con arreglo a la resolución 1296 (XLIV) del Consejo Económico y Social.

[3 de febrero de 1986]

La Federación Sindical Mundial señala a la atención de la comunidad internacional la situación negativa de los derechos humanos en Chile. Esta situación, que tuvo su comienzo el 11 de septiembre de 1973, ha sido una de las características fundamentales de la acción concertada en el actual sistema de violencia y delincuencia de la policía y de los órganos de seguridad con abrumadora participación de las fuerzas armadas.

El balance de las violaciones manifiestas de los derechos humanos en Chile en 1985, según indican órganos humanitarios y otras instituciones internacionales de derechos humanos, es aproximadamente el siguiente:

- 5.437 chilenos fueron "víctimas directas" de la represión, sin contar los miles de personas detenidas en redadas efectuadas en barrios populares;
- 67 asesinatos;
- 160 heridos (la mayor parte de ellos graves y con heridas de armas de fuego);
- 169 personas relegadas (confinadas a zonas distantes e inhóspitas);
- 147 personas torturadas;
- 667 personas heridas o lesionadas por la acción de la policía;

- 350 víctimas de diferentes formas de intimidación;
- 33 personas secuestradas por un comando anónimo de las fuerzas de seguridad;
- 3.848 personas a quienes se prohibió regresar a su país (cifras publicadas por el Gobierno). En la práctica hay miles de personas que han sido exiliadas.

El hecho de que la actitud del Gobierno y las consecuencias cada vez más negativas de la política económica del régimen sean totalmente contrarias a los intereses del país y su población resulta evidente si se examinan las cifras que siguen:

- mientras que el Gobierno paga a los bancos de crédito internacional el 60% de los ingresos de exportación, el 30,3% de los chilenos, o sea 3.666.000 personas, viven en extrema pobreza;
- la economía chilena depende en grado creciente del Fondo Monetario Internacional y de las empresas transnacionales, mientras que la capacidad productiva del país se destruye gradualmente. El país tiene la deuda externa per capita más alta del mundo, porque, en cifras globales, 23.000 millones de dólares de los Estados Unidos son equivalentes al 115% del producto nacional. En esta situación, el desempleo afecta al 30% de la población económicamente activa, que se estima en 4.420.000 personas. En otras palabras, de un total de 12 millones de personas, 1,5 millones viven en la pobreza, el hambre y en condiciones de extrema miseria con sus familias, en un país de abundantes recursos naturales y productivos.

La actitud del régimen hacia los trabajadores puede juzgarse por el horrible asesinato de Manuel Guerrero, después que fue detenido por la Dirección de Informaciones y Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR). Manuel Guerrero era jefe de la organización chilena de trabajadores de la educación, AGECH, y presidente del Consejo Metropolitano de Santiago de dicha organización. De modo análogo, José Manuel Parada, funcionario de la Vicaría de la Solidaridad, y el periodista Santiago Nallino fueron asesinados brutalmente por las fuerzas de represión del régimen.

Otros actos indicativos de esta actitud son los ataques perpetrados por grupos sospechosos de periodistas vestidos de paisano en la sede y los locales de la Conferencia Nacional de Trabajadores de la Construcción; este grupo cometió toda clase de abusos, atacando a los obreros que estaban presentes y robando equipo, muebles, material de oficina, documentación e incluso efectos personales de sus víctimas.

A continuación se mencionan algunos hechos característicos relativos a las violaciones brutales de los derechos humanos ocurridos en el último año.

Un nuevo centro disciplinario

En la prisión pública de Santiago, las medidas disciplinarias contra los presos políticos se están volviendo cada vez más drásticas. Como resultado de los acontecimientos ocurridos en la Penitenciaría el 19 de octubre, la Dirección General de Gendarmería, a cuyo frente está el Coronel Hidalgo, transformó la

prisión pública en centro disciplinario. Se trasladó allí, como reclusos, a los siguientes presos políticos: Carlos García (con heridas de bala y múltiples cardenales), Luis Quintana, Jorge Palma, Hugo Marchant (cubierto de cardenales) y Carlos Araneda (el cual, gracias a las iniciativas adoptadas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, fue ingresado en el Hospital Penitenciario, dada la gravedad de sus lesiones).

Los parientes de los detenidos confirman que los reclusos en el nuevo centro disciplinario viven en condiciones que son un oprobio para la dignidad humana. Durante seis meses no se les permitió recibir visitas, viven entre constantes penalidades físicas y psicológicas; se ha impedido a sus familiares que les proporcionen comida y vestimenta, y están todos hacinados en los bloques de celdas 9 y 10 del centro.

Huelga de hambre total

El lunes, 9 de diciembre de 1985, nueve presos políticos iniciaron una huelga de hambre en la Penitenciaría de Santiago. El ayuno que decidieron mantener es "total", lo cual significa que, aparte de no tomar alimento alguno, los manifestantes no beben ningún líquido. Los presos que llevaron a cabo la huelga de hambre total fueron: Miguel Pérez Quintero, Guillermo Rodríguez Morales, Luis González Ugalde, Marcelo Rodríguez Herrera, José Mínguez Naranjo, Fernando Reveco Soto, Rubén Riquelme Retamal, Mario Mella Cruces y Luis Salamanca Fernández.

Los presos en huelga se han fijado los siguientes objetivos: reunificación de los presos políticos y agrupación por zonas, aceleración de los juicios, otros beneficios, reconocimiento oficial de la condición de presos políticos y examen de un proyecto de amnistía.

Esta huelga, que recibió amplia solidaridad, tanto a nivel nacional como internacional, cesó el 19 de diciembre de 1985 en respuesta a una petición del jefe de la Vicaría de la Solidaridad, Monseñor Santiago Tapia, el cual, alarmado ante el considerable deterioro de la salud de los huelguistas, les visitó y les informó de sus gestiones ante las autoridades.

Matanza de presos políticos en la Penitenciaría de Santiago

Ocho muertos y 26 heridos graves fue el balance de la reciente represión llevada a cabo por la policía y por fuerzas paramilitares cuando algunos presos políticos detenidos en la Penitenciaría presuntamente trataron de escapar.

La Asociación de Familiares de Presos Políticos negó que los acontecimientos que tuvieron lugar en la Penitenciaría fueran consecuencia de un intento de escapar por parte de los presos. En una declaración que hizo, la Asociación rechaza categóricamente la versión oficial y afirma que lo que de hecho ocurrió fue otra nueva maniobra de la dictadura destinada a "eliminar a las personas que mantenían como rehenes".

El trato que dan los guardianes a más de 1.000 presos políticos, muchos de ellos sindicalistas, en los establecimientos penales de todo el país es brutal, mientras que el Estado comete asesinatos con plena libertad e impunidad. Entre muchas acciones directas y de otro tipo, planificadas con ayuda de los presos comunes, están el asesinato del preso político Víctor Zúñiga Arellano por las fuerzas de policía el 18 de octubre de 1985, las graves heridas infligidas a Jorge Salma Donoso en la Penitenciaría de Santiago y el asesinato del estudiante

universitario Gonzalo Muñoz, así como las lesiones producidas a otros presos políticos en la cárcel de Valparaíso -heridas infligidas por presos comunes con cuchillos. Estos acontecimientos no son aislados; ponen de relieve la aguda y feroz represión del régimen, incluso dentro de los establecimientos penales.

La Federación Sindical Mundial está convencida de que se necesitan nuevos esfuerzos internacionales concertados para poner fin a la destrucción gradual de esta pequeña nación latinoamericana que lleva más de 12 años en las manos del fascismo.

La Federación Sindical Mundial propone que las Naciones Unidas intensifiquen sus actividades con miras a obtener:

- a) La liberación de los presos políticos y de las personas relegadas;
- b) El fin inmediato del exilio de los chilenos y su regreso al país;
- c) Un examen de la aplicación de las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985 con respecto a Chile;
- d) Información detallada sobre los crímenes y desapariciones de los que se oponen al régimen, y castigo de los que instigan y ejecutan tales crímenes;
- e) El respeto del derecho al pleno empleo, a la justa remuneración, al reajuste de los salarios, a salarios, prestaciones y pensiones en consonancia con el aumento del costo de vida, etc.

Como anexo figura una lista incompleta de los presos políticos y de los lugares de su detención por todo el país*.

* No se reproduce.